



BOLETIN ECLESIASTICO
DEL
Obispado de Astorga

SUMARIO:—I. Sobre reservación de casos.—II. Ministerio de Gracia y Justicia: Real Orden:—III. Sentencia importante sobre el pago de derechos de estola y pié de altar: IV. Necrología.

NOS LIC. D. ANTONIO SENSO LAZARO,

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA
OBISPO DE ASTORGA, CAPELLAN DE HONOR DE S. M., CON-
DECORADO CON LA CRUZ BLANCA DEL MERITO MILITAR
ETC., ETC.

Con el fin de dar cumplimiento a lo que se previene en la Instrucción de la S. Congregación del Santo Oficio sobre la RESERVACIÓN de casos de conciencia por los Ordinarios, publicada en el número 22 del *Boletín Eclesiástico* de este Obispado, después de haber oído el docto parecer de Nuestro Excmo. Cabildo y el de varios señores Curas párrocos sobre la necesidad o utilidad de la reservación de algunos pecados en esta Nuestra diócesis, hemos venido en disponer y por el presente disponemos:

1.º Que desde la publicación de este Nuestro Decreto en el *Boletín Eclesiástico* de la diócesis serán solamente casos reservados episcopales en esta de Astorga los que a continuación se expresan:

- A) *Periurium in iudicio cum damno tertii.*—
- B) *Incestus in primo et secundo gradu consanguinitatis vel affinitatis ex licito matrimonio provenientes.*

2.º Queda, por tanto, derogada la reservación de los otros casos consignados en la Constitución novena capítulo segundo de las Sinodales de esta Diócesis.

3.º Facultamos para que puedan absolver de los casos que ahora Nos reservamos a) a Nuestro Provisor y Vicario general y al Penitenciario de Nuestra S. A. I. Catedral; b) a los señores Dignidades y Canónigos de la misma; c) a los Arciprestes y vicearciprestes; d) a los Superiores locales de las Ordenes y Congregaciones religiosas establecidas en esta Nuestra diócesis, y en sus ausencias y enfermedades al Religioso que les sustituya.

Los Reverendos señores Arciprestes podrán subdelegar la facultad de absolver de los casos reservados *toties quoties* a los confesores de sus respectivos arciprestazgos, en caso urgente y determinado.

4.º A fin de que los confesores se hagan car-

go de las facultades *extraordinarias* que la Santa Sede les concede, advertimos, que en virtud de lo dispuesto en la Instrucción mencionada del Santo Oficio, la reservación de estos casos de conciencia cesa *ipso iure*:

A) Con los enfermos que deseen confesarse y no puedan salir de casa; con los esposos que se confiesan para contraer matrimonio, y con los penitentes cuya absolución, según el prudente juicio del confesor, no puede diferirse hasta recurrir al Superior, sin grave incómodo para los mismos penitentes, o sin peligro de violación del sigilo sacramental.

B) Cuando el confesor ha pedido facultad al Superior para absolver a un penitente en un caso determinado, y le fuere denegada; más solamente *por aquella vez*.

C) Durante *el tiempo útil, o señalado para el cumplimiento del precepto pascual*, están facultados para absolver de los mencionados casos, sin necesidad de otra autorización, los Párrocos y cuantos en derecho se equiparan a ellos, a saber, Ecónomos, Regentes, Encargados de parroquias y Coadjutores de anejos, sin que esta facultad se restrinja a su propia parroquia o al territorio de la misma.

D) Finalmente, según la presente disciplina, los confesores de esta Nuestra diócesis podrán absolver en la misma de los casos reserva-

dos en otras diócesis con tal que no estén también reservados en este Obispado, aunque vengan los penitentes *precisamente* para obtener la absolución.

5.º Y exhortamos a los señores Curas a que, según se previene en la referida Instrucción, instruyan bien a sus feligreses acerca de la gravedad de los pecados cuya reservación se decreta, predicando con la oportunidad y prudencia debida sobre su malicia y fealdad, y traten de inspirarles un horror profundo hacia ellos, empleando los medios más oportunos para desarraigarlos de entre los feligreses, a fin de evitar las molestias consiguientes a las reservaciones, y conseguir, con la gracia de Dios, más suavemente y con mayor seguridad el efecto que se desea.

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Astorga, a catorce de Febrero de mil novecientos diez y siete.

† **Antonio**, Obispo de Astorga.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Del Ministerio de Gracia y Justicia se ha recibido en este Obispado la siguiente Real Orden:

Excmo. Señor:

Visto el expediente instruido en ese Obispado sobre erección en curato propio, de entrada, del anejo de Palazuelo de Orbigo, perteneciente a la parroquia de San Juan de Gavilanes.

Visto el auto definitivo recaído en el expresado expediente decretando la segregación del citado anejo y su erección canónica en parroquia.

Vistas las disposiciones legales aplicables en esta materia.

Considerando que la necesidad de atender a la mejor administración y servicio espiritual de los fieles de un territorio parroquial es causa, reconocida como suficiente por los Sagrados Cánones, para proceder a la división del mismo, apareciendo en el expediente de que se trata justificada esta necesidad y utilidad, puesto que el anejo Palazuelo está separado de su parroquia San Juan de Gavilanes por bastante distancia, por lo cual sus vecinos no están asistidos, cual corresponde, en el cumplimiento de sus deberes religiosos.

Considerando que la causa expresada ha sido tenida en cuenta por V. E. para decretar, en el ejercicio de sus facultades propias y mediante las formalidades canónicas procedentes, la segregación del indicado anejo y su erección en curato propio de entrada, y que en el expediente instruido al efecto, han sido oídas las personas llamadas a informar, habiéndolo hecho en sentido favorable.

Considerando que en el mencionado anejo existe Iglesia apropiada y capaz, por haber sido parroquia antes del arreglo parroquial.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se erija en curato de entrada, propio e independiente, el anejo Palazuelo, segregándolo al efecto de su matriz San Juan de Gavilanes, siendo de provisión ordinaria mediante concurso y terna, con derecho a percibir el que lo obtenga la asignación anual de mil pesetas, con más las obvenciones de estola y pie de altar y demás derechos que le correspondan, y doscientas cincuenta pesetas también anuales para Culto, llevándose al efecto dichas cantidades al presupuesto por obligaciones eclesiásticas de este Ministerio, y participándolo a la ordenación de pagos a los efectos oportunos.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 26 de Enero 1917.—*J. Alvarado.*

Sr. Obispo de Astorga.

**Sentencia importante sobre el pago
de derechos de estola y pié de altar.**

En la villa de San Esteban de Nogales a treinta y uno de Octubre de mil novecientos diez y seis, visto por este Tribunal municipal, formado por los señores D. Daniel Huerga Diéguez, Juez municipal, y Adjuntos de turno D. Silvestre Pérez López y D. Luis Prieto Fernández, el juicio verbal civil entre partes y, como demandante D. Tomás Combarros Blanco, cura párroco de esta villa, y como demandado D. José Calvo Prieto, natural y vecino de la misma, labrador, sobre reclamación de dos cuartales de trigo, correspondientes a las anualidades de mil novecientos catorce y mil novecientos quince, como derechos parroquiales.

Resultando: Que llamadas las partes a juicio, el demandante don Tomás Combarros se ratifica en el contenido de la demanda, y el demandado José Calvo Prieto alega: «Que no paga los cuartales que en la demanda se le reclaman, porque el arancel que los invoca está suprimido por el nuevo; que, según le han informado, el pueblo paga los derechos parroquiales por el nuevo arancel, por tanto él no está obligado a pagar por el antiguo. Además, el cuartal, como toda oblación eclesiástica, es de carácter voluntario, y él, dice, no tiene esa voluntad, ni puede ser obligado, porque no existe ley formulada que le obligue», concluyendo que se le absuelva de la demanda con imposición de costas al demandante; y en conclusión, después de reclamar los cuartales que ha satisfecho al Párroco hasta el año mil novecientos catorce, pide se tome declaración al demandante: «Si el Arancel a que se refiere el cuartal está derogado por el nuevo; si es igualmente

cierto que no ha tenido convenio escrito con el pueblo para obligarse al pago del cuartal, y como lo es igualmente que ha cobrado derechos de estola y pié de altar con arreglo al arancel vigente, que suprime dicho cuartal»; a lo que el demandante contesta afirmativamente a los dos extremos primeros, y dice que es falso de toda falsedad el último, esto es, dice que nunca ha cobrado derechos por el arancel moderno, y sí por el que autoriza el cuartal. El demandante intenta probar lo contrario en lo que se refiere al último extremo, y pide se le admita prueba testifical, la que juramentada dice: «Que no sabe por qué arancel ha cobrado el párroco sus derechos, sólo aseguran que por entierros de primera han pagado dos de ellos cien pesetas cada uno, y ciento cinco otro, y por celebración de matrimonio diez pesetas según otro, entregando el total al párroco sin entenderse con ninguna otra persona, corriendo de parte del párroco pagar a los sacerdotes asistentes, al sacristán, con todo lo concerniente a dichos actos, como son, los derechos de fábrica y la cera para el culto.

Resultando: Que el demandante apoya sus razones con la doctrina establecida por la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares de 15 de Marzo de 1889; con el art. 38 del Concordato de 1851, ley del Reino; con el art. 34 del mismo; Real instrucción de 21 de Julio de 1838, y varias veces después, 21 de Septiembre de 1841, 3 de Enero de 1854 y 2 de Octubre de 1871; formación de aranceles parroquiales, previo reconocimiento expreso por parte del Estado de la obligación de satisfacer estos derechos exigibles ante los tribunales de justicia. Entre varias de las Reales Cédulas cita la auxiliatoria expedida en 20 de Septiembre de 1891 por S. M. la Reina; Real decreto del Ministro de

Hacienda de 4 de Enero de 1867 aprobando los derechos de estola y pié de altar fijados en el arancel formado, al cual fué prestado el Real asenso, y promulgado por el Sr. Obispo de la Diócesis de Astorga en 18 de Febrero de 1892, ordenando empezase a regir el 1.º de Marzo del mismo año. Alega también dicho demandante, para justificar su reclamación, el art. 1.º del capítulo 1.º del arancel de febrero de 1892 y el artículo 2.º del capítulo 1.º del arancel de 1908, terminando con negar sea cierto haya cobrado derecho alguno por el arancel de 1908, y pidiendo al tribunal se digne condenar al demandado al pago de lo reclamado en la demanda e imposición de costas.

Resultando: Que en la tramitación de este juicio se han observado las formalidades legales.

Considerando: Que las razones fundamentales en que apoya su defensa el demandado son: 1.ª que el arancel que marca el cuartal está suprimido por el moderno de 1908; 2.ª que el pueblo paga los derechos parroquiales por este último, lo que trata de probar con prueba testifical, y por lo tanto a él no le obliga el cuartal; 3.ª que el cuartal es una ofrenda de carácter voluntario, y él no tiene esa voluntad, ni puede ser obligado, porque no existe ley formulada que le obligue, únicas cuestiones a resolver en lo que tiene expuesto, y de donde nace el estar o no obligado el demandado Jose Calvo Prieto, feligrés no pobre de esta villa de San Esteban de Nogales, a pagar dos cuartales de trigo a su Párroco D. Tomás Combarros Blanco. Pero como en el arancel aprobado por R. O. de 1908, en sus artículos primero y segundo del capítulo 1.º que trata de las ofrendas, dice: Art. 1.º «Se suprime la *ofrenda obligatoria* del cuartal de trigo o centeno incluida en el arancel anteriormente aprobado»; Art. 2.º

«Podrán sin embargo aquellos pueblos que lo prefieran continuar rigiéndose por el referido arancel, pero tendrán en cualquier momento la facultad de optar por el que se establece en la presente reforma, lo cual podrán conseguir por medio de una instancia elevada a Nos y firmada por la mayor parte de los vecinos del pueblo en que así lo expresen»; de donde se desprende que la ofrenda obligatoria del cuartal de trigo, por ser la especie más abundante, está en vigor en esta parroquia de San Esteban de Nogales, pues el art. 2.º del capítulo 1.º del Arancel de 1908 (o mejor dicho, reforma del aprobado por R. C. auxiliatoria de 20 de Septiembre 1891) pone, como condición indispensable para anular el arancel que marca el cuartal y principiar a regir la última reforma, la de ser solicitada por el Párroco del pueblo, con tal que en este último caso sea por solicitud firmada por la mayoría de los vecinos de la parroquia, o de lo contrario, quedará en vigor el Arancel que marca el cuartal aprobado, previo dictamen de la comisión permanente del Consejo del Estado, por R. O. de 27 de Marzo de 1908; y como en esta parroquia no se ha solicitado, ni por el Párroco, ni por la mayoría de los vecinos, queda en todo su vigor el aprobado por R. C. de 20 de Septiembre de 1891, cuya aprobación fué inserta en la *Gaceta* de Madrid, y se publicó también en el *Boletín* de la Diócesis y en el de la provincia en la forma que prescriben la Real Cédula auxiliatoria y las leyes concordadas.

Considerando: Que teniendo en cuenta la prueba, y visto por este tribunal el arancel de mil novecientos ocho, y por otra parte visto el de 1891 en lo que se refiere a derechos en el cap. 5.º art. 12, prescindiendo de la concurrencia de los ocho sacerdotes a que obligaría dicho art. sino fuera la facultad de reducir ese número.

en virtud de lo contenido en el art. 12, cap. V, 3.^a *aclaración* a los Aranceles parroquiales de la Diócesis. Mas incluyendo las seis velas de cera blanca, de que hace mención el repetido art. 12 del Arancel de 1891, y sumados a esto los derechos del art. 23, cap. IX, por razón de las misas celebradas después del sepelio, con más la ofrenda voluntaria hecha en la misa de entierro y los derechos de los sacerdotes forasteros por razón de la comida y el viaje, según lo establecido en la observación 5.^a, art. 16, resulta un total de más de ciento cinco pesetas, detalles más que suficientes para ver que no es cierto venga cobrando el Párroco por el arancel de 1908, como dice el demandado. Y aunque éste dice que el cuartal es una ofrenda de carácter voluntario, y que no existe ley formulada que le obligue, fundado tal vez en la R. O. de 18 de Diciembre de 1884 que declaró las oblatas no exigibles por tener «carácter libérrimo y espontáneo», no obstante, esta R. O., además de carecer de fuerza contra la ley y la costumbre, quedó en suspenso por otra de 3 de Mayo de 1885. Además, en el arancel aprobado por Real Cédula de 20 de Septiembre de 1891 se dice (cap. V., art. 16, observación 10.^a): «Que se conserva únicamente como obligatoria la ofrenda anual a que se refiere el cap. 1.^o de dicho arancel». Además, si bien es cierto que en otros tiempos fué voluntaria la ofrenda del cuartal de trigo, como lo han sido todas entre los cristianos desde tiempos apostólicos, y sería hoy la del litigio si no estuviese reconocida en los aranceles con fuerza de obligar, en la actualidad no sucede lo mismo, ni se puede confundir la ofrenda del cuartal de trigo con los diezmos y primicias suprimidas por leyes del Reino; porque llegó una época en que se decretó la obligación de dar ofrenda en algunas ocasiones, y el Gobierno de S. M., al aprobar

los Aranceles, ejerce un poder que tiene, por lo cual la R. C. auxiliatoria de 20 de Septiembre de 1891 es de obligatorio cumplimiento; de donde se deduce que la ofrenda del cuartal de trigo en esta parroquia no es voluntaria, como el demandado dice, y sí obligatoria conforme con el art. 1.º del cap. 1.º del Arancel de 1891, que dice: «Los feligreses de todas las parroquias de la Diócesis no siendo pobres, a excepción de los de la ciudad de Astorga y cabezas de partido judicial, estarán obligados a satisfacer anualmente a su párroco un cuartal de trigo o centeno según la mayor abundancia de una de estas dos especies, o un cántaro de vino donde se coja, a elección del contribuyente, por razón de las cuatro ofrendas u otras que se acostumbren, sin que se conserve otra alguna obligatoria más que la mencionada del cuartal o cántaro»; y como ésta no ha sido suprimida en esta parroquia con arreglo a lo que dispone el art. 2.º del Arancel de 1908 referente a la solicitud, existe la obligación fundada en ley formulada, aunque el demandado cree no existe, y además de no solicitarlo, el pueblo ha venido siempre pagando pacíficamente el cuartal de trigo.

Considerando que la ofrenda del cuartal de trigo en esta parroquia es una retribución que los feligreses vienen obligados a dar a su párroco o presbítero que esté al frente de la parroquia, aparte de otras razones ya expuestas, por la razón de la festividad de la Patrona del pueblo, rogativas públicas, bendición de campos y demás beneficios espirituales ni agradecidos ni justificados y que son generales a todos. Teniendo en cuenta todo lo expuesto.

Fallamos: Que debemos condenar y condenamos a José Calvo Prieto al pago de los dos cuartales reclamados en la demanda, correspondientes a los años de 1914

y 1915, al Cura párroco D. Tomás Combarros Blanco, con imposición de las costas y gastos causados en este juicio. Así definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos =*Daniel Huerga*=*Silvestre Pérez*=*Luis Prieto Fernández*=*Rubricado*.

* *

Apelada esta sentencia al juzgado de La Bañeza, éste dictó la siguiente:

D. Arsenio Fernández de Cabo, Secretario Judicial del Juzgado de primera instancia del partido de La Bañeza: Doy fe: que en el rollo procedente del juicio verbal civil que antecede recayó la sentencia, que a la letra dice.

Sentencia.—En la ciudad de La Bañeza, a veintinueve de Diciembre de mil novecientos diez y seis, el Sr. D. Ladislao Roig y Mariño, Juez de primera instancia de este Partido, habiendo visto por sí los presentes autos de juicio verbal civil promovido en el Tribunal municipal de San Esteban de Nogales por D. Tomás Combarros Blanco, Cura Párroco y vecino del mismo San Esteban de Nogales, contra su convecino D. José Calvo Prieto, mayor de edad, casado y labrador propietario, sobre pago de dos cuartales de trigo por derechos parroquiales correspondientes a los años de 1914 y 1915, y cuyos autos fueron venidos a este Juzgado en grado de apelación de la sentencia dictada por dicho Tribunal municipal en treinta y uno de Octubre último, recurso interpuesto por el demandado, y que le fué admitido en ambos efectos; y

Aceptando los resultandos de la sentencia apelada; y

Resultando: Que por el Tribunal municipal de San Esteban de Nogales se dictó sentencia en estos autos el día 31 de Octubre último, por la cual se condenó a

José Calvo Prieto al pago de los dos cuartales reclamados en la demanda, correspondientes a los años de 1914 y 1915, con imposición de las costas y gastos causados en el juicio. Que notificada dicha sentencia a las partes, por el demandado José Calvo Prieto se interpuso en tiempo recurso de apelación, que le fué admitido en ambos efectos, y emplazadas las partes, se remitieron los autos a este Juzgado de primera instancia, en el cual se mejoró el recurso en tiempo y forma, y transcurrido el término del emplazamiento, se señaló día para la vista, siendo citadas las partes en forma legal.

Resultando: Que en el acto de la vista, que tuvo lugar en este día con asistencia de las partes, por el apelante José Calvo Prieto se solicitó la revocación de la sentencia con imposición de costas al demandante por las razones que alegó en dicho acto, encaminadas a demostrar que no se trata de una prestación forzosa u obligatoria, sino voluntaria, y que tiene carácter de oblación, y por lo tanto no puede ser jurídicamente exigida. Y por el apelado D. Tomás Combarros se solicitó la confirmación de la sentencia apelada por las razones alegadas en el inferior.

Resultando: Que en la sustanciación de este juicio se han observado las formalidades legales en ambas instancias.

Aceptando los considerandos de la sentencia apelada; y

Considerando además que, no obstante la denominación de ofrenda que se da *al cuartal*, el derecho a su percepción por los Párrocos y Coadjutores impone a estos la obligación de prestar determinados servicios, como son, la celebración de la festividad del Santo Patrono, rogativas públicas, bendición de campos, etc., etc., y recíprocamente al deber de satisfacerlos, por

parte de los feligreses lleva anejo el derecho en estos de exigir la prestación de los mencionados servicios, de donde resulta que la denominada ofrenda es una verdadera retribución, medio de sustentación por los trabajos o servicios a que el Párroco se obliga en beneficio de todos los feligreses.

Considerando: Que estando incluído el pago del *cuartal* en los Aranceles que señalan los derechos que los Párrocos han de percibir, y siendo evidente que en la parroquia de San Esteban de Nogales se hallan en vigor los aprobados por Real Cédula de veinte de Septiembre de 1891 por la razón que se expone en el primer considerando de la sentencia apelada; y siendo también manifiesto que aquellos han sido sancionados por el poder civil, de acuerdo con lo concordado por ambas potestades, es indudable su carácter obligatorio y consiguiente eficacia legal, pues en otro caso habría que admitir el absurdo de reputar letra muerta los Aranceles, la enormidad de imputar a los Reverendos Obispos la inclusión en aquellos de derechos legalmente irreclamables, y el error de estimar que el Estado sancionaba lo ilegal; o que, en el último término, la aprobación concedida era totalmente ineficaz.

Considerando: Que teniendo el demandado el carácter de feligrés de la parroquia de San Esteban de Nogales, y no habiendo justificado que sea pobre, se halla por aquel concepto obligado a satisfacer el cuartal, objeto de reclamación, deber que es anejo al mencionado carácter y que debe cumplir, por consiguiente, mientras no pierda el concepto de feligrés.

Considerando: Que si bien es cierto, como se afirma en el segundo considerando de la sentencia apelada, que la ofrenda fué voluntaria en otros tiempos, como lo fueron todas las retribuciones que por la administración

de Sacramentos y actos del culto externo se hacían, no es menos cierto que la necesidad impuso como obligatorias determinadas ofrendas y obligaciones que se venían satisfaciendo con carácter voluntario en determinadas diócesis, incluyéndose al efecto en los Aranceles, para que, una vez aprobados, nadie pudiera dudar de su valor y eficacia.

Considerando: Que el art. 35 del Concordato de 1851, al expresar *«además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones están fijados o se fijaren para este objeto en los aranceles de las respectivas Diócesis»*, es indudable que claramente se refiere a toda clase de remuneraciones con tal que estén incluidos en los Aranceles, y estos hayan sido aprobados en virtud de lo convenido entre ambas potestades.

Considerando: Que dada la naturaleza del presente asunto, no es de estimar temeridad en primera instancia a los efectos de la imposición de costas, procediendo imponerlas en esta segunda al apelante en cumplimiento de las pertinentes disposiciones legales.

Vistos el Concordato de 1851, Real orden de 26 de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y uno, Real Cédula de 3 de Enero de 1854, Sesión XXII del Concilio de Trento, ley del Reino, Real Cédula auxilioria de 20 de Septiembre de 1891, Aranceles de la Diócesis de Astorga de 1891 y 1903, y demás disposiciones aplicables, y las pertenecientes de las Leyes de Enjuiciamiento civil y Justicia municipal.

Fallo: Que debo de confirmar, como confirmo, la sentencia apelada por la que se condena al demandado José Calvo Prieto a que pague al demandante D. Tomás Combarros los dos cuartales de trigo reclamados en la demanda, correspondientes a los años de 1914 y 1915,

revocándola en lo relativo al pago de costas en primera instancia, de las que no se hace especial imposición, e imponiendo al demandado apelante las causadas en esta segunda instancia.—Devuélvanse los autos principales al Tribunal municipal de que proceden dentro del término legal, con testimonio literal de esta sentencia para su ejecución.—Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firma—*Ladislao Roig*—*Rubricado*.



NECROLOGIA.

En los días 2, 3, 6 y 13 fallecieron, respectivamente, don Andrés Blanco Blanco, párroco de Castrotierra, don José Herrero González, ecónomo de Cabeza de Campo, D. Benigno Domínguez Furones, párroco de Sta. Colomba de las Monjas y D. Marcelo Romero Sánchez, párroco de Bretó:

Pertenecían a la Asociación Sacerdotal de Sufragios, y tenían acreditado el cumplimiento de cargas. De D. José Herrero no consta que haya levantado las cargas más que hasta Febrero de 1912. Hacen los números 353, 354, 355 y 356.

También falleció el 11 don Santiago Alonso Carrero, Coadjutor de Villamontán. No pertenecía a la Asociación Sacerdotal de Sufragios.

S. S.^a Il^{ma}. ha tenido a bien conceder 50 días de Indulgencia en sufragio de sus almas. (R. I. P.)